PONENCIA: Retos de la justicia transicional en Colombia: las dificultades estructurales para adelantar procesos efectivos de restitución de tierras en el departamento del Cesar.

Grupo de investigación: Conflictos sociales, género y territorios

Título de la ponencia:

Retos de la justicia transicional en Colombia: las dificultades estructurales para adelantar procesos efectivos de restitución de tierras en el departamento del Cesar.

Autores con filiación institucional y correo electrónico:

Camilo Andrés Castiblanco Durán: camilocastiblanco@usantotomas.edu.co
Universidad Santo Tomás, Facultad de Sociología

Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes: ginnethnarvaez@usantotomas.edu.co
Universidad Santo Tomás, Facultad de Sociología

Diego Lugo Vivas: d.lugovivas@umiami.edu
CET Universidad del Valle - Universidad de Miami

- **Resumen** (150 a 250 palabras)

La posición geoestratégica del departamento del Cesar (conexión entre el Caribe, la subregión del Catatumbo y la frontera con Venezuela) ha generado distintas formas de violencia a lo largo de la historia reciente del país; lo que sumado a una estructura de tenencia de la tierra de grandes extensiones y articulada a modelos de monocultivo y megaminería, han potenciado las luchas por el territorio en esta región del país. Múltiples factores dan cuenta de fuertes dinámicas de despojo y de expropiación, lo que se ha visto reflejado en diversos procesos de reclamación presentados ante la institucionalidad creada por el Estado a partir de la Ley 1448 de 2011, con un saldo negativo en las respuestas dadas por el Estado.

La ponencia presenta el resultado de un ejercicio investigativo sobre el análisis de las diversas formas de violencia, burocratización y dificultades de las comunidades en el acceso a la plena garantía de sus derechos de restitución, partiendo de un debate conceptual sobre las posibilidades fácticas de implementación de mecanismos de justicia transicional en contextos donde aún no hay una transición efectiva a escenarios de paz.

Palabras clave

Departamento del Cesar - Justicia Transicional- Víctimas - Restitución de Tierras

- **Introducción**

La investigación buscó comprender las posibilidades y límites en los procesos de aplicación de los mecanismos transicionales ante las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar, explorando dos ejes concretos de esta situación: 1) el acceso a la satisfacción de derechos de restitución de tierras ante la magnitud del desplazamiento que se presentó en la región, teniendo presente que operaron estructuras paramilitares, guerrilleras y acciones irregulares por cuenta de la Fuerza Pública; finalmente, y 2) una revisión a las dinámicas transicionales encargadas de restituir tierras en el departamento como lo es la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un análisis sobre los límites de esta entidad y sobre las necesidad de fortalecimiento comunitario de las poblaciones para que accedan a los mecanismos de satisfacción de derechos que estas contemplan.

- **Planteamiento del problema**

El departamento del Cesar ha sido el escenario de distintas formas de conflictividad derivadas de la disputa por los importantes corredores de movilidad que allí convergen (interconexión entre la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá, y a través de esto, rutas que conectan a la región Caribe con el Catatumbo y con puntos limítrofes estratégicos con

Venezuela); de los recursos económicos propios de la minería, el cultivo de algodón y maderero que se dan de manera preferencial en este departamento; así como disputas socioculturales con las comunidades indígenas que se asientan en esta zona (Wayuu, Yukpas, Kamkuamos y Wiwas). Este escenario permite rastrear diversas formas de violencia hasta los procesos de expansión de la frontera agrícola y la aparición de la industria minera en los años 20 del siglo XX, con transformaciones puntuales en la materialización de la violencia, más no en sus causas estructurales, las cuales están centradas en las disputas por el control de los territorios.

De esta manera, distintos analistas del fenómeno de la violencia en el departamento ponen de presente que las tensiones generadas por la ampliación de la frontera minera, algodonera y palmicultura en el Cesar estuvieron signadas por la violencia y por el desconocimiento de los derechos a los predios del campesinado, configurando progresivamente una zona marcada por el latifundio y la industrialización agraria. La presencia de esta conflictividad previa a la entrada de los actores armados organizados del conflicto (guerrillas y paramilitares) evidencia una serie de causas estructurales arraigadas en la constitución del territorio, y obliga a explorar las responsabilidades estructurales del modelo económico y de la configuración política departamental.

Pese a la naturaleza estructural de la violencia, se ha constatado que el pico estadístico de la victimización de la población civil se presentó entre 1992 y el 2005 cuando se dio el auge del paramilitarismo en el departamento, a través del Bloque Norte de las AUC comandado por Rodrigo Tobar Pupo, alias “Jorge 40”, organización que estableció diversas alianzas con el sector minero energético, con la dirigencia política y con las elites económicas del Cesar para evitar cualquier forma de reclamación o protesta ante el orden establecido, y para consolidar enormes extensiones de tierra para el afianzamiento del modelo económico señalado. Así, al hacer un recuento de estos dispositivos de violencia empleados por esta organización, el Tribunal Superior de Justicia y Paz señaló que los patrones de macrocriminalidad empleados fueron 5: masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, y violencia basada en género; siendo el desplazamiento forzado la más presente en este departamento, información que es coherente con las bases de datos del CNMH y del CERAC.

Este panorama de victimización ocasionó profundos daños en el territorio, en el tejido social y en las comunidades indígenas y campesinas; sin embargo, los trabajos que se desarrollaron

para restituir los derechos de estas comunidades y para garantizar el derecho a la memoria de las víctimas del Bloque Norte de las AUC se encontró que los niveles de reclamación y organización en este departamento eran mucho más bajos que los de otros de la región, lo cual se puede deber a dos factores explicativos: 1) a altos niveles de violencia (física, simbólica y/o institucional) aún presentes que impiden que se adelanten estos ejercicios de reclamación de derechos; o 2) a la configuración de una normalización de la violencia que ha llevado a que se valide como natural las formas de concentración de la tierra o las diversas formas de cooptación del Estado realizado por las distintas élites departamentales.

De allí, que el propósito de la investigación estuvo orientado a comprender esas dinámicas violentas que generaron obstáculos objetivos y simbólicos, para que las comunidades de víctimas pudieran acceder a la institucionalidad y normatividad existente; en ese sentido, fue necesario diferenciar aquellas barreras interpuestas por la vinculación irregular entre actores violentos y entes público estatales, generando potenciales espacios de revictimización y procesos de violencia contra los reclamantes, de aquellos procesos de normalización de la violencia en el que las comunidades asumen que los actos que se presentaron (o que aún se presentan) están legitimados por estructuras y órdenes sociales establecidos. A partir de lo anterior, se desprende la segunda parte de esta investigación, orientada a analizar el alcance en el esclarecimiento de falsos positivos, así como generar insumos pedagógicos e investigativos que permitan que las comunidades sean plenamente conscientes de todos los derechos vulnerados y de las formas de reclamación y acceso a la transicionalidad que hoy está activo en la legislación nacional e internacional.

Las investigaciones previas consultadas para el desarrollo de esta investigación dan cuenta de tres factores que resultan relevantes para la estructuración del objetivo general que guía el trabajo: En primer lugar, varios autores ponen de presente que la presencia de los avances normativos e institucionales en materia de justicia transicional en el mundo no son suficientes para garantizar que estos logren efectivos procesos de transición hacia dinámicas de paz o de transformación de los conflictos. Algunos de ellos plantean que dichos mecanismos no son suficientemente porque los contextos de violencia dificultan el acceso a los mismos y que a partir de ello establecen los límites fácticos de las reformas judiciales y normativas (Chenou, Chaparro, Mora, 2019; Uprimmy, 2005); pero también está la posición de los investigadores que hay dificultades de acceso por los niveles de complejidad y burocratización de dichos

mecanismos, haciendo que varios sectores sociales se auto-excluyan de presentar procesos de reclamación (Wesche, 2019).

Una segunda línea argumentativa, gira alrededor de los procesos de revictimización que se han presentado en las experiencias previas de administración de justicia en Colombia, en el que aquellos que se han atrevido a presentar denuncias formales han sido vulnerados de distintas formas, generando barreras para que otras comunidades se acerquen a esos entramados. Este caso se ha estudiado en gran medida con los reclamantes campesinos de Trujillo en el Valle del Cauca y Tierra Alta en Córdoba, quienes aparecieron asesinados paulatinamente, y cuyas familias también fueron intimidadas cuando se acercaron a presentar reclamaciones (Guerrero y López, 2020; Tamayo, 2019).

Existe una literatura muy interesante sobre el contexto específico del Cesar y sobre los retos y dificultades en el proceso de restitución de tierras que se ha dado en ese contexto, exponiendo las particularidades departamentales en material de presencia de actores armados, de los diversos modelos económicos que cohabitan dentro de sus fronteras y de la tradición política que se ha presentado; todos estos factores son documentados para establecer las verdaderas posibilidades de generación de tejido social que propenda por el desarrollo de procesos efectivos de restitución integral de predios (Wesche, 2019; Tapia, 2019; Zukerman, 2018).

La paz como un proceso de construcción constante y como un fin colectivo anhelable se convierte en la tarea principal de las instituciones del Estado, además de un deber cívico de todos los sectores de la sociedad que se encuentre en proceso de transición. En esta medida, la paz puede ser entendida como “el contexto en el cual se despliegan los conflictos de forma no violenta y creativa. Para conocer la paz hay que conocer el conflicto y saber cómo pueden transformarse los conflictos, tanto de manera no violenta como de manera creativa” (Galtung, 2003, P 31).

Para llegar a la transformación de los conflictos de forma no violenta, primero se hace necesario conocer el origen, las causas, los motivos y los actores que se ven envueltos en el desarrollo del conflicto violento; es en esta etapa en donde “El derecho a la verdad” tiene una importancia significativa. Diversas instancias internacionales han enfatizado en el concepto de verdad como un derecho primordial de las víctimas de los conflictos violentos dentro del Estado, pasando desde los postulados de la lucha contra la impunidad (1997) hasta la

formulación más jurídico – técnica de las comisiones de la verdad como ente comprometido a hacer material y efectivo este derecho a la verdad.

Ahora bien, contemplando el aspecto de la verdad como un derecho, entendido como “saber lo que ocurrió, sin limitar ese saber o conocer al episodio particular sufrido por una determinada víctima, sino extendiéndolo a sus raíces en la historia, al contexto en el que ocurre y en el que se hace posible” (Rincón, 2010:54) se da pie a contemplar el carácter imperativo del componente de la verdad en un contexto de desarrollo e implementación de justicia transicional en aras de lograr la paz en un país como Colombia, azotado históricamente por los conflictos violentos internos. Conflictos los cuales han afectado de manera significativa a la población civil, dejando como resultado la múltiple vulneración de los derechos humanos y un alto porcentaje de la población como víctima del conflicto interno.

Por lo tanto, desde las aproximaciones que se han adelantado por parte del gobierno en función de construir paz y generar reparación a las víctimas, se proclama el derecho a la reparación en la ley 975 del 2005 en donde “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas” (Ley 975 del 2005). Adicional a esto, dicha ley proclama que “La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido” (Ley 975 del 2005). Esto da cuenta que, dentro del proceso contemplado y establecido para la reparación a las víctimas, la satisfacción del derecho a la verdad es necesario para la contribución al proceso, y el deber del Estado en dicha satisfacción (Rincón, 2010; Uprimmy, 2005).

Estos elementos fueron a su vez desarrollados y operacionalizados a través de la Ley 1448 de 2011 y la institucionalidad que surgió de esta, tales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras, poniendo nuevos elementos conceptuales y operativos al debate amplio y conceptual sobre los significados de la reparación, la restitución y la transformación del conflicto.

Metodología:

Este proyecto de investigación ha tenido dos fases investigativas. En la primera se realizó un análisis de contexto (acorde con los lineamientos metodológicos de la justicia transicional) en el que se tuvo en cuenta el contexto histórico del conflicto armado, ambiental y económico del departamento del Cesar y los impactos y afectaciones específicas que se desprenden de esto. En ese momento los instrumentos de investigación fueron de naturaleza exploratoria y panorámica, triangulando bases de datos abiertas, informes públicos y académicos con entrevistas realizadas a expertos en la temática, funcionarios públicos y líderes sociales.

La segunda fase analizó en detalle los procesos de victimización departamental, la estadísticas de restitución y se partió del muestreo inicial con las bases de datos de la Unidad de Víctimas y de las víctimas acreditadas ante la JEP, para posteriormente hacer un ejercicio de muestreo cualitativo acorde con los resultados de la primera fase.

La última fase se concentró en construir un diagnóstico respecto del alcance de los procesos de restitución de tierras en el departamento, sus principales obstáculos, así como los avances logrados a la fecha.

● Análisis de datos y Resultados

Las dinámicas de tenencia de la tierra en el departamento del Cesar han estado condicionadas históricamente por la presencia de estructuras económicas que han presionado por el monocultivo y la agroindustrialización, trayendo consigo severas consecuencias para el campesinado y una distribución inequitativa de la concentración y propiedad de la tierra. Aunque en las décadas de los años 60's y 70's se presentaron intentos de reforma agraria y el surgimiento fugaz de mediana propiedad, esto se trastocó por la presión de los grandes poseedores y por las dinámicas de violencia que se consolidaban en la región, y generaron amplios procesos de victimización contra diversos sectores sociales¹.

Estos procesos de victimización del campesinado desde el modelo económico y desde la aparición de estructuras de violencia encargados del mantenimiento del mismo, condicionaron la consolidación de movimientos populares y democráticos en la región; y en

¹ Gobernación del Cesar. *Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del Cesar: Reintegración de excombatientes y riesgos de violencia*. Disponible en: <https://bit.ly/2R6nZw9>

su lugar emergieron estructuras guerrilleras (no directamente conectadas con las luchas populares previas) que terminaron por estigmatizar las formas de resistencia campesinas existentes en el territorio. Así, la entrada de las FARC y del ELN al departamento, lejos de transformar las estructuras de propiedad, lo que hicieron fue radicalizar las posiciones de los propietarios contra cualquier propuesta de reforma agraria que se presentará en el territorio (CINEP, 2014).

Por ello, esta región experimentó el recrudecimiento de la violencia en contra de todas las formas de organización social, a través de la presencia de estructuras paramilitares que arremetieron de forma masiva, sistemática y grave contra la población civil, a través de patrones de violencia que fueron suficientemente conocidos por medio de las distintas Sentencias proferidas por la Sala de Justicia y Paz. En esos documentos se pone de presente que el actuar de la estructura paramilitar no se centró exclusivamente en generar una lucha antsubversiva, sino que sus propósitos también estuvieron vinculados con la concentración de tierras y del poder político para la cooptación del Estado.

En ese proceso expansivo del sector minero industrial (EJATLAS, 2015) y de los reductos terratenientes, se alinearon las estructuras paramilitares, algunas instancias de la Fuerza Pública y sectores específicos de la dirigencia política, generando un escenario monopólico y en el que no había posibilidad de generar reclamaciones ante la manera en la que el actor económico doblegó toda posibilidad de mediación por parte del Estado.

El modelo expansivo minero fue el escenario de diversas acciones violentas contra la población civil, con el propósito de generar procesos de despojo, minimización de las formas de resistencia o imposición de un escenario de control social absoluto, por ello los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre se presentó un gran número de asesinatos masivos selectivos (masacres), orientadas a demostrar el poder que sustentaba el orden social predominante. En el caso puntual del Cesar, están documentadas 20 masacres² que dan cuenta de una estrategia sistemática por apoderarse de predios a través de las dinámicas de desplazamiento que se producen después de estos actos.

² Masacre de Santa Cecilia, Masacre Curumani, Masacre de los Erazos, Masacre Barrio Las Flores, Masacre de Becerril, Masacre La Aurora, Masacre de Potrerillo, Masacre zona urbana de Bosconia, Masacre de la Jaula de Ibirico, Masacre de zona urbana de Bosconia, Masacre el Carrizal, Masacre de San Diego, Masacre Funcionarios del CTI, Masacre de San Ramón, Masacre del Copey, Masacre Finca La Paulina, Masacre en el corregimiento de Estados Unidos, Masacre de los hermanos Zequeira, Masacre de Minas de Iracal y Masacre de las Raíces

Los testimonios de las víctimas de estos hechos, ponen de presente que en esa región del país las instituciones de seguridad, de justicia y democráticas estaban alineadas con ese modelo. En el caso de la Fuerza Pública se ha documentado las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de la Unidad Militar BAPOP, la cual es responsable “...del 45.5% de las víctimas reportadas como ejecutadas extrajudicialmente por la responsabilidad Fuerza Pública a nivel nacional entre 2002 y 2010” (COEUEUROPA, 2013); así mismo, en los encuentros de verdad generados con ocasión de las versiones libres de los comandantes del antiguo Bloque Norte de las AUC, se hicieron distintos señalamientos a la Fiscalía, a la Policía, al DAS y a otras entidades públicas por obstrucción en el proceso de acceso a la justicia y reclamación de derechos³. Pero a la vez, el departamento, y en general la región, fue el escenario en el que se presentaron diversos contubernios entre la dirigencia política con este entramado violento para permitir la expansión del proyecto paramilitar y del modelo económico propuesto, tales como los Pactos de Chivolo (URT, 2015:56), Pivijai⁴ y de El Difícil⁵, por el que hoy están condenados más de 20 dirigentes regionales⁶ lo que es un indicador fehaciente de la capacidad de captación de la institucionalidad pública desatada por estos poderes.

Aunque esta situación se reproduce en toda la región, se encontró una particularidad en el departamento del Cesar, donde el fenómeno presenta menores procesos de reclamación, y en el que parece haberse instaurado una lógica de legitimación de lo ocurrido. Este fenómeno no se encuentra solamente en los procesos judiciales, sino que también impactó a la academia y a los procesos de investigación y esclarecimiento que allí podrían haberse presentado.

³ Centro Nacional de Memoria Histórica, En honor a su memoria: víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano, CNMH, Bogotá, 2017.

⁴ EL ESPECTADOR, *Implicados en el pacto de Pivijay aceptaron sus nexos con paramilitares*, 29 marzo 2012, <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/implicados-el-pacto-de-pivijay-aceptaron-sus-nexos-para-articulo-335353>.

⁵ VERDAD ABIERTA “El Canoso revela existencia de otro pacto entre paras y políticos en magdalena”, 24 mayo 2010, <https://verdadabierta.com/el-canoso-revela-existencia-de-otro-pacto-entre-paras-y-politicos-en-magdalena/> y <https://lasillavacia.com/silla-caribe/la-resurreccion-de-munarriz-63334>

⁶ José Domingo Dávila Armenta y Miguel Aragón por el caso del Chivolo; Dieb Maloof, Jorge de Jesús Castro, José Gamarra Sierra, Gustavo Orozco, Manuel Meza Gamarra, Martha Miranda, Franklin Lozano, Daniel Solano, Arnulfo Borja, Fernando Orozco por el Pacto de Pivijay y Trino Luna Correa, Luis Eduardo Vives, Jorge Caballero, Alfonso Campo Escobar por El Difícil.

La otra particularidad del Cesar radica en los procesos macroeconómicos que se presentan dentro de su territorio, y que hacen que la conflictividad esté más directamente relacionada con la profundización del modelo económico basado en la minería y en la explotación de hidrocarburos; lo cual vincula al actor minero como victimario, tercero y víctima de las dinámicas de violencia que se presentan en la región.

En el caso del Carbón, Colombia es el cuarto exportador de carbón térmico en la escala mundial (UPME, 2015: 19, con un aumento de la producción de carbón de 8% anual promedio en los últimos años. Al respecto cabe destacar que, de la producción nacional, el 89.80% se encuentra en los departamentos de la Guajira y Cesar y allí se realizan los dos proyectos carboníferos más importantes de Colombia⁷, que han transformado los entornos ambientales donde operan, afectando a las comunidades presentes en la zona.

Si bien la realización de esta actividad genera grandes ingresos para las autoridades locales, mediante el pago de impuestos y regalías, esto no ha sido focalizado en las poblaciones más necesitadas, teniendo sus necesidades básicas insatisfechas (UPME, 2015: 51), además de ser quienes pagan las consecuencias en términos de calidad de vida y disponibilidad de recursos ambientales. La operación carbonífera ha ocasionado graves daños e impactos ambientales y sociales debido a los drásticos cambios a los que someten la zona donde están las explotaciones. Se afecta el paisaje, el uso del suelo y se altera la forma de vida en la región. En este contexto, los pobladores tienen que cambiar su vocación agropecuaria por las que le permita la minería de carbón (Defensoría del Pueblo, 2014: 7), pues todas las fases de la operación, desde la exploración, explotación y transporte, generan consecuencias en los territorios (Minambiente, 2017: 6).

A raíz de las operaciones carboníferas en la región se han presentado varios fenómenos que han derivado en claras violaciones a los derechos humanos de las comunidades allí presentes, como el desplazamiento forzado, catalogado por el Estado como el reasentamiento involuntario y el aumento de homicidios. En este departamento llegaron a operar cinco empresas que explotan carbón: Drummond, Glencore, Vale, Goldman Sachs y Norcarbón S.A., las cuales iniciaron sus principales actividades por los años 90, existiendo demandas a

⁷ Los dos proyectos más importantes son: El Cerrejón, en el departamento de La Guajira, La Loma, ubicada entre los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná en el departamento de Cesar.

nivel nacional e internacional por violaciones a los Derechos Humanos y por afectaciones medioambientales sobre todas estas (PNUD, 2015:16).

Esta situación ha generado afectaciones sobre comunidades campesinas han sido víctimas de desplazamiento por las condiciones del ambiente en su región. Cabe resaltar que las empresas mineras, iniciaron un proceso de compraventa sistemática de tierras, donde los campesinos con predios adjudicados por INCORA, vendieron sus terrenos por precios muy inferiores a su valor real o con áreas menores a la realidad, ante amenaza de expropiación.

De la misma manera, el deterioro del aire, los suelos y el agua, los obligó a dejar atrás los territorios donde desarrollaban sus actividades de subsistencia. Esta situación se hizo evidente una vez entró en funcionamiento la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), pues los campesinos empezaron a presentar solicitudes para la restitución de los predios despojados por la violencia, incluso los que se tenían contratos de compraventa, debido a que las empresas tenían una clara ventaja sobre los vendedores (PNUD, 2015:29). Ante estas situaciones, el Estado estableció que en las áreas de proyectos de interés nacional estratégico (PINE), no procedería la restitución de tierras, norma que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. A pesar de ello, se evidencia la prioridad del gobierno en lo económico frente la protección de los derechos de las víctimas y las garantías de no repetición para los hechos violatorios de estas comunidades.

Para el caso de comunidades étnicas, la contaminación y los cambios en el paisaje llevaron a que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), mediante Resolución 1525 de 2010, ordenar el reasentamiento y fijar algunos parámetros, como restituir los medios de producción, las actividades productivas de las comunidades afectadas y apoyar a la consolidación de nuevas redes sociales, políticas, económicas y culturales⁸. En la práctica, en el reasentamiento no se ha venido cumpliendo con los parámetros establecidos por el MAVDT, se han presentado contextos en donde las negociaciones se hacen individuales, afectando la unidad comunitaria (Betancourt, Villarivera, 2017: 25), con la

⁸ El reasentamiento debía contar con “(...) tierras aptas para el restablecimiento de los medios de subsistencia de las comunidades y la implementación de proyectos productivos, prestación de servicios públicos y sociales, fuentes de agua naturales, vías de acceso adecuadas, conexión con la infraestructura física existente en la zona”. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0970 de 2010. Art. 4, numeral 5.35.2. Disponible en: <https://bit.ly/2S58yc2>

pérdida de importantes tradiciones culturales, al ser separados y tener que migrar a distintos lugares.

Así como el despojo y el desplazamiento forzado se presentan en las regiones con operaciones de explotación minera, la violencia sobre los pobladores locales, la persecución y asesinato de líderes sociales que se oponen a esta actividad, se han vuelto prácticas comunes asociadas a esta la presencia de los diferentes actores armados, con un significativo incremento en los últimos años.

- **Conclusiones**

Entre las principales conclusiones se pudo evidenciar que la estructura paramilitar de la región propende por mantener el mismo orden de legitimación de tenencia de la tierra, no sólo por la vía del reconocimiento de la fuerza, sino por la garantía de poder emplear a la población si se legitima el modelo de desarrollo. La gente del común agradece el trabajo que le brindan, sea quien sea quien explote la tierra, sin importar si es empresa privada nacional o multinacional. En el Cesar se deben indagar las causas socio-culturales de la reincidencia de los excombatientes paramilitares ahora en bandas criminales que defienden el mismo modelo de expoliación y explotación de la tierra. El enfoque diferencial de tratamiento a las mujeres que presenta la URT se puede ver representado en un 70% de mujeres reclamantes, aún así son altas las cifras de renuncia a la denuncia y a los procesos en curso que aún no está clara. Los excombatientes paramilitares de bajo rango no reconocen que despojaron a los colomos o a los indígenas, para ellos se respondía a órdenes del comandante de la zona, que propendía por la protección de la población civil, la representación social desconoce las responsabilidades colectivas de los grupos armados ilegales, comprenden el desplazamiento como una compra-venta que fue lícita en su momento. Los excombatientes eran de la zona. Lo que han denunciado algunas organizaciones de derechos humanos a la fecha, es que en el desarrollo de los procesos judiciales de restitución de tierras, se le ha venido entregando información importante a los victimarios, lo que en definitiva revictimiza a los denunciantes, en favor de los terceros de mala fe. Por otra parte, se constató la filtración de información incluso desde la misma institucionalidad. Y entre las cifras más representativas, dadas por la Directora de la Unidad de Restitución de Tierras Regional, se hallan las siguientes: La URT reportó 12.834 hectáreas con orden de restitución y 7.526 personas identificadas como beneficiarias en sentencia por departamento.

- **Referencias bibliográficas:**

Atlas de Justicia Ambiental. *EJATLAS*. 2015. Disponible en: <https://bit.ly/2MxiohI>

Benavides, F. y Borda, S. (2019) “Introducción: el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP o la paz esquivada” En Revista Cidob d’Afers Internacionals, N° 121, Barcelona.

BETANCUR, Ana Cecilia y VILLA RIVERA, William (2017) *Minería del Carbón en la Guajira y el Cesar. Huellas sociales, económicas y ambientales*. Bogotá: Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas. IWGIA

Chenou, J.M. Chaparro, L.P. Y Mora, A.M. (2019). Broadening Conceptualizations of Transitional Justice Through Using Technology: ICTs in the Contexto f Justicia y Paz in Colombia. *International Journal of Transitional Justice*. Vol 13.

Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP). *Impactos socioterritoriales de la explotación minera en los departamentos del Cesar y La Guajira. La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales*. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert, 2014. Vol. 1.

De Greiff, P. (2011) Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la justicia transicional. En Claudia Sarmiento (2011) *Anuario de Derechos Humanos*. No 7. PP. 17 –39. DOI: 10.5354/0718-2279.2011.16994

Defensoría del Pueblo (2014). Informe Defensoría del Pueblo Regional Cesar: Afecciones en la salud y daño ambiental como consecuencia de la explotación minera en el centro del Cesar. Valledupar.

Galtung. (2003). Primera parte. Teoría de la Paz. En Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao, España: Gernika Gogoratz.

Guerrero, F.A. López, L. (2020) Images and Memory: Religiosity and Sacrifice – The Cases of Tierralta, Trujillo and Arenillo in Colombia. International Journal of Transitional Justice. Volumen 14. pag 35 y 36.

Ley 975 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Bogotá, Colombia. 25 de Julio de 2005.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, (2017). *Política Ambiental para la Cadena Productiva de Carbón*. PACC. Bogotá.

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario -COEUROPA- (2013). *Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la política de defensa y seguridad democrática*. Documentos temáticos n.º 8. Disponible en: <https://bit.ly/2OxqG8V>

Olasolo, H., Ramirez, J. (2017). The Colombian integrated system of Truth, Justice, Reparation and non- Repetition. Journal of International Criminal Justice, Volume 15, Issue 5, December 2017, Pages 1011–1047.

Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) (2015). *Análisis de conflictividades y construcción de Paz*. Bogotá. Disponible en: <https://bit.ly/2T5Ps2x>

Rivera, A. (2003). Responsabilidad extracontractual del Estado: análisis del daño fisiológico o a la vida de relación. Universidad Javeriana. (Tomado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS19.pdf>)

Rincón, Tatiana. (2010). Justicia, verdad y reparación. La justicia en la justicia transicional. Colección Debates democráticos. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario.

Tamayo, C. (2019) Victims' collective memory and transitional justice in post-conflict Colombia: The case of the March of lights. *Memory Studies*. Pg 3.

Tapia, N. (2019). The Category of Victim "From Below": the Case of the Movement of Victims of State Crimes (MOVICE) in Colombia. *Human Rights Review*. Vol 20: 299

Tellez, J. F. (2019) Peace agreement design and public support for peace: Evidence from Colombia. *Journal of Peace Research*. Vol 56: 831

Unidad de Planeación Minero Energética (2015) . *Incidencia real de la minería del carbón, del oro y del uso del mercurio en la calidad ambiental con énfasis especial en el recurso hídrico - Diseño de Herramientas para la planeación sectorial*. 2015. Contrato interadministrativo GGC 223, CI-002-2015. Bogotá.

Uprimny, R y Lasso, L. (2004). "Verdad, reparación y justicia para Colombia: Algunas reflexiones y recomendaciones", en *Conflicto y seguridad democrática en Colombia*. Temas críticos y propuestas. Bogotá: Fundación Social, FESCOL, Embajada de Alemania. .

Unidad de Restitución de Tierras (URT) (2015), Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015